



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Informe firma conjunta

Número:

Referencia: ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD LEY N° 24.065 AUDIENCIA PÚBLICA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de enero de 2023, siendo las 8:38 horas, se labra la presente acta a los efectos de dejar constancia del desarrollo de la Audiencia Pública convocada por la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 576 de fecha 9 de noviembre de 2022, la que se efectuará de manera virtual.

A continuación, toma la palabra el Presidente de la Audiencia, Walter Domingo

“Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Walter Domingo Martello, soy el Interventor del ENRE, a mi lado se encuentran los Ingenieros Diego BIBÉ y Federico PRESERN estamos aquí a efectos de presidir esta Audiencia Pública, por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), conforme fuera dispuesto por la Resolución ENRE N° 576 de fecha 9 de noviembre de 2022.

En primer lugar, quiero saludar a las y los funcionarios presentes; legisladores/as nacionales y provinciales; representantes de las empresas concesionarias; representantes de las asociaciones de usuarios, sindicatos y público en general.

También quiero saludar y agradecer a todo el personal del ENRE que con su trabajo y dedicación hacen posible esta audiencia pública, fueron muchas horas de trabajo para preparar todo en un corto tiempo y aún quedan por delante muchísimo trabajo más por hacer, a todos ellos quiero manifestar mi reconcomiendo.

Seremos asistidos legalmente por el Dr. Sergio BERGOGLIO y/o su alterna Dra. Liliana GORZELANY; y en la Secretaría de la audiencia se desempeñarán las Doctoras Silvia AGINSKY, Camila BEUX y María Laura DOMINGUEZ. Esta Audiencia se va a regir por el Reglamento de Audiencias Públicas aprobado por el Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003 que fue adoptado por el organismo mediante la Resolución ENRE N° 30 de fecha 15 de enero de 2004.

Se pone en conocimiento de los participantes que funcionarios del ENRE están presentes para colaborar y facilitar el acceso de quienes se inscribieron a tal efecto, que el desarrollo de la misma será registrado de manera taquigráfica, videograbada y también podrá seguirse en vivo por la plataforma digital YouTube.

Quiero aclarar que por primera vez la transmisión de la audiencia será subtitulada en forma automática a fin de favorecer la accesibilidad al público en general sin perjuicio de los mecanismos legales mencionados precedentemente. Asimismo, esta primera parte será acompañada por lenguaje de señas, para ello, contamos con la colaboración de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (ANDIS).

Conforme lo normado por el Reglamento de Audiencias Públicas, a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del día 6 de enero de 2023 y hasta las VEINTITRÉS HORAS Y CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS (23:59 h) del día 20 de enero de 2022, se habilitó el Registro de Participantes en la página web <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifas/audiencia-publica-edenor-edesur-2023>, donde se registraron a fin de su participación en esta Audiencia VEINTIOCHO (28) inscriptos, conforme da cuenta el Acta de cierre de Inscripciones labrada al momento del cierre que consta digitalizada como IF-2023-07947090-APN-SD#ENRE en el Expediente N° EX-2022-122923139-APN-SD#ENRE.

Considerando las facultades del Decreto PEN N° 1.172/2003 que confiere a la Presidencia de la Audiencia Pública y dando inicio formal a los recaudos de la misma se aprueba el correspondiente Orden del Día invitándose a considerar los puntos que lo integran.

Se deja constancia que con fecha 22 de enero de 2023, el mencionado Orden del Día ha sido debidamente publicado en la página web del ENRE, para conocimiento de los participantes, autoridades, público en general y medios de comunicación.

Con referencia a los hechos y el derecho a considerar, se exponen sucintamente los motivos y los objetivos de la convocatoria.

Es dable señalar que la Ley N° 27.541, que es la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN) a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) o realizar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de la Ley N° 24.065.

En este sentido, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020 determinó el inicio de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal.

Asimismo, se encomendó a este Ente Nacional a realizar el proceso de renegociación de las revisiones tarifarias, considerándose necesaria la reestructuración tarifaria determinada en la Ley N° 27.541 y además le otorgó diversas facultades a este Ente Regulador para llevar a cabo este proceso. Lo dispuesto en el mencionado Decreto fue prorrogado por UN (1) AÑO por el Decreto N° 815/2022 de fecha 6 de diciembre de 2022.

Es por ello, que este Ente dictó la Resolución ENRE N° 16 de fecha 19 de enero de 2021, dando inicio al proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral para lograr un Régimen Tarifario de Transición (RTT), hasta lograr el Acuerdo Definitivo de Renegociación y es, en este sentido, que se convocó a esta Audiencia para que participen las prestadoras del servicio público de distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción del ENRE; es decir a las EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.).

El artículo 8 del Decreto N° 1020/2020, determinó la aplicación de mecanismos que posibiliten la participación ciudadana, contemplando las previsiones del Reglamento General de Audiencias Públicas para el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobado por el Decreto N° 1.172/2003 o bien el régimen propio de participación que el Ente disponga conforme a su normativa.

Y el artículo 2 de la Resolución ENRE N° 16/2021 también estableció las diversas formas de participación ciudadana que el Ente puede disponer a los efectos de garantizar la publicidad de los actos del Estado y el debido cumplimiento del derecho al acceso a la información.

Finalmente, por la Resolución ENRE N° 576/2022 se convocó a esta Audiencia Pública para poner en conocimiento de la ciudadanía y escuchar las opiniones respecto de la cuestión que nos convoca.

Consideramos a esta Audiencia Pública como de vital importancia para el interés público ya que en la misma trataremos cuestiones tarifarias ligadas al aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) a través del cual se remunera a las empresas distribuidoras por su servicio de operación y mantenimiento de la red de distribución de energía eléctrica.

Ante escenarios de alto impacto inflacionario como los que se han vivido el último año uno de los objetivos que debe perseguir la tarifa eléctrica es la asequibilidad, es decir que cada universo de usuario pueda acceder al servicio y, usándolo eficientemente, poder afrontar la factura correspondiente.

Desde 2019 y hasta la segmentación materializada en el mes de Octubre de 2022 no se identificaba la demanda en términos socio-económicos. La segmentación permite una primera aproximación a establecer criterios de asequibilidad y de equidad.

Esta es la primera audiencia pública donde el debate tarifario permite introducir un punto fundamental para los servicios públicos esenciales. El alcance que las leyes 27.541 y 27.668 , y del Decreto 332/2022 confieren el mandato para segmentar las demandas energéticas, y establecen topes de impacto para el Nivel 2, identificado como el sector de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

El ENRE, en resguardo de los usuarios y en cumplimiento del mandato legal y reglamentario, garantizará que se cumpla el efecto de no superar el tope establecido, a pesar que el objeto pretendido y requerido por las prestadoras es, precisamente, el traslado del impacto de los precios relativos de la economía, representado por los índices de Variación Salarial, de Precios al Consumidor y de Precios Mayoristas, de modo directo sin ningún tipo de restricción.

Dejo sentado que el Estado no puede ni debe renunciar al Poder Tarifario, que se representa a la evaluación de las circunstancias (oportunidad, mérito y conveniencia), para el conjunto de los usuarios y para la economía. La aplicación de mecanismos automáticos sin distinciones de la afectación del derecho a la asequibilidad y de la evaluación de los impactos ciertos y comprobables en la matriz de costos de la distribuidora afecta esos derechos.

Es por ello que, a través del tiempo, con la ganancia de las economías de escala, propias de los monopolios naturales, el organismo efectuará un análisis exhaustivo de la presentación, pero con los criterios antes citados.

Por otro lado, cabe señalar que, siguiendo el mandato legal y del Decreto, vemos como en otras regulaciones de la región se han ido incorporando diferenciaciones tarifarias que hacen a la asequibilidad del servicio de electricidad.

El concepto de asequibilidad aplicada a las demandas eléctricas está presente en la inmensa mayoría de la legislación en la materia en Latinoamérica. Son varios los países en donde la regulación contempla subsidios intra-demanda y esquemas de subsidios basados en la estratificación socioeconómica de los hogares residenciales. Como en los casos de Colombia / Panamá / Perú y Ecuador. Por su parte, Brasil y Chile lo hacen a través de la acción del Estado, sin involucrar a otras categorías de usuarios. Es cierto que en algún sentido los

subsidios intra-demanda pueden llegar a generar distorsiones, pero ante una emergencia socio-económica, como la existente y declarada por el Honorable Congreso de la Nación, que a la vez estableció un tope, la operatividad regulatoria debe hacer uso de esta herramienta. No podemos olvidar que la focalización de subsidios es una tarea que conlleva un ingente esfuerzo al Estado, tiempo y recursos. En esta situación de transición buscando garantizar una cierta equidad y garantizando la accesibilidad al servicio de electricidad a todos los usuarios, no únicamente a aquellos que se encuentran en condición de poder pagar la tarifa plena del servicio.

El derecho a la asequibilidad de los servicios públicos no es una interpretación subjetiva de esta Intervención. Es un derecho reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el considerando número 33° del Fallo CEPIS al dictaminar que: "...el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de "confiscatoria", en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar. Por lo demás, no debe obviarse que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento y, por vía de consecuencia de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio." De lo que se concluye que un aumento desmesurado del cuadro tarifario terminará resultando contrario incluso a los propios intereses de las Distribuidoras. El Fallo CEPIS marca un rumbo en materia de distribución de los ingresos requeridos en materia tarifaria, al plantear como derecho de los diferentes conjuntos de usuarios el pago en función de su capacidad.

Los nuevos cuadros tarifarios que surjan de este proceso de readecuación tarifaria deben contribuir a la tarea progresiva y gradual de "ordenar los precios relativos sin destruir la economía de cada argentino y argentina" quienes hoy en día tienen su economía familiar sometida a mucha presión por la inflación y con "su capacidad de crédito casi agotada". Este es el escenario social base sobre el cual realizaremos la presente readecuación tarifaria, no pudiendo ésta ignorar dicho contexto social.

A las empresas Distribuidoras le repetimos exactamente el mismo concepto que mencionamos en la Audiencia Pública del 30 de noviembre de 2022 con las empresas Transportistas: "No van a obtener la tarifa que piden, van a obtener la tarifa que los usuarios puedan pagar en el actual contexto económico y social."

Eventualmente, de ser necesario, evaluaremos la posibilidad de realizar una corrección tarifaria a través de una nueva adecuación transitoria en el cuarto trimestre del año.

Nuestro interés está en la economía real, en el impacto de las tarifas en la economía familiar, en que las tarifas sean asequibles para los usuarios, es decir, que estén a su alcance, que se ubiquen dentro de la verdadera capacidad de pago de los usuarios del servicio y que abonar dicho servicio no implique un esfuerzo excesivo sobre la economía familiar. Que las familias no deban resignar consumos básicos para poder pagar las tarifas.

Por otra parte, no quiero dejar de mencionar que alguien declaro recientemente que "Argentina posee la regulación más bizarra del mundo". Nosotros creemos que lo verdaderamente bizarro (en el sentido de raro y extravagante, según define el concepto la RAE) es pretender tarifas del primer mundo ofreciendo una calidad de servicio del tercer mundo. No solo eso, también resulta "bizarro" no poder gestionar y hacer funcionar un negocio cuando el mismo se caracteriza por operar sobre un mercado no competitivo en el cual los usuarios se encuentran cautivos del operador y carecen de la posibilidad de optar por un proveedor alternativo. Téngase en cuenta que, si estas pésimas calidades de servicio se producirían en un mercado competitivo, donde el usuario puede optar

libremente por otro proveedor, el proveedor del servicio deficiente e insuficiente se quedarían rápidamente sin ningún cliente y en la bancarrota.

Creemos sinceramente que quienes critican nuestra legislación regulatoria, o están molestos por las sanciones que se les aplican, deben reflexionar y no cometer el gran error de hacer abuso de su posición dominante. Porque seguiremos estando alertas y siendo implacables a la hora de sancionar, previo sumario que asegure el derecho a la defensa y el respeto a los principios del procedimiento administrativo, no para castigar, sino –como establecen los propios Contratos de Concesión– para aplicar sanciones “...basadas en el perjuicio económico que le ocasiona al usuario recibir un servicio en condiciones no satisfactorias.” El régimen sancionatorio establecido en la Ley 24.065 no posee un carácter represivo, sino, una naturaleza contractual y un propósito reparador y retributivo. El objeto de las sanciones contenidas en el contrato de concesión y en la Ley no pretende ser un castigo, sino, tienen por finalidad incentivar a la concesionaria al cumplimiento de los niveles de inversión que permitan la prestación del servicio en condiciones de calidad y eficiencia.

Las autoridades de las empresas deben considerar la inmensa responsabilidad tomada voluntariamente al asumir gestionar el servicio público de distribución de la electricidad. Que cuando se produce un “corte de luz” no solo se ve afectado lo que denominados “la calidad técnica del servicio”. En términos humanos, la discontinuidad del suministro eléctrico afecta la seguridad, la salud y la economía de la población. Afecta la seguridad cuando se apaga el alumbrado público y las personas deben caminar por calles oscuras y ser potenciales víctimas de la inseguridad, o circular por avenidas sin iluminación ni semáforos pudiendo sufrir un accidente vial; afecta la salud cuando se ve comprometido el servicio de agua potable y cloacas. Efecto que tiene un mayor impacto en el conurbano bonaerense en donde la mayoría de los hogares dependen de bombas eléctricas para poder proveerse de agua; también afecta la seguridad y la salud cuando se trata cortes que afecten a los usuarios electrodependientes; afecta en la economía, cuando pierden la cadena de frío alimentos, mercaderías y medicamentos y deben ser desechados, o cuando los golpes de tensión arruinan electrodomésticos, con el consiguiente perjuicio económico familiar. En síntesis, afecta directamente la calidad de vida de los usuarios. Y especialmente los afecta emocionalmente al sentirse estafados en su buena fe por su proveedor de electricidad. Porque el compromiso asumido por las Distribuidoras de mantener la continuidad del servicio es una obligación de resultado. Y en cumplimiento de esta obligación cuando la red por algún motivo falla las empresas deben contar con los medios alternativos para asegurar la continuidad del servicio y garantizar la provisión de energía eléctrica a fin de satisfacer la demanda de los usuarios en tiempo y forma.

Finalizando, vamos a exigir a las distribuidoras un plan de inversiones que garantice en sus respectivas áreas de concesión un servicio eficiente y de calidad. Inversiones que serán objeto de análisis de las áreas del organismo y serán auditados para que se concreten en tiempo y forma. Seremos rigurosos en la verificación de ello, ya que, como desgraciadamente sabe la comunidad de usuarios, hay zonas donde la calidad está sistemáticamente afectada. Es por ello que avanzaremos en el control de la calidad en las zonas donde la afectación en alimentadores se mantenga por más de un semestre.

Reiteramos el compromiso de ésta Intervención con la defensa de los derechos de los usuarios y con la búsqueda de garantizar un servicio de distribución de electricidad de calidad, seguro y sustentable, lo que con justo derecho merecen los usuarios y usuarias del AMBA. Ese es nuestro norte y nuestro compromiso. Muchas Gracias.”

A continuación, el Sr. Interventor dispone dar tratamiento al Orden del día:

1.- Federico MÉNDEZ, DNI 28057913, en representación de la distribuidora EDENOR S.A.;

- 2.- Jorge Alberto LEMOS, DNI 20185318, en representación de la distribuidora EDESUR S.A.
- 3.- Mariana GROSSO, DNI 23091506, en representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina;
- 4.- Gastón Arnoldo ARIAS, DNI 18038295, en representación Defensoría del pueblo de la Provincia de Buenos Aires;
- 5.- Diego MIELNICKI, DNI 23303554, en representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- 6.- Fernando Javier GRAY, DNI 21750585, en representación del Intendente Municipio de Esteban Echeverría;
- 7.- María José LUBERTINO BELTRAN, DNI 13735378, en representación de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos;
- 8.- Pedro Alberto BUSSETTI, DNI 7756671, en representación de DEUCO, Defensoría de Usuarios y Consumidores;
- 9.- Paula Magali SOLDI, DNI 38706937, en representación del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad;
- 10.- Claudio Daniel BOADA, DNI 12300136, en representación Unión de Usuarios y Consumidores
- 11.- Convocado el Sr. Lucas TASSO, DNI 26327495, en representación de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos De Villa Lían no se encontraba presente en la sala por lo que se le concede la palabra al expositor N° 12;
- 12.- Claudio BULACIO, DNI 13789398 en representación ADEERA;
- 13.- Alberto CALSIANO, DNI 4515911, en representación Unión Industrial Argentina;
- 14.- Fernando ANTOGNAZZA, DNI 14100696, en representación de Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA);
- 15.- Juan Agustín GAMMACURTA, DNI 38524322 en representación de la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina;
- 16.- Guillermo DEL GIORGIO, DNI 17373767, en representación de Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina (ATEERA);
- 17.- María Rosa SURITA, DNI 22710814, Particular interesado Expositor;
- 18.- Convocada la Sra. Eva Beatriz RIVERO, DNI 5761087 para su exposición, no se hizo presente en la sala virtual como tampoco el siguiente orador Sr. Elías ZUBCOV, DNI 4171314, por lo cual se concede la palabra al siguiente expositor;
- 20.- Horacio FEINSTEIN, DNI 4536310, Particular interesado Expositor;

Siendo las 12:20 h se anuncia la apertura del Registro de participantes por el término de treinta (30) minutos. Se

deja constancia de que el mismo podrá ser visualizado en la página oficial del ENRE.

21.- Convocada para su participación la Sra. Fernanda Itati PEDROZO, DNI 45840447, no se hizo presente en la sala virtual por lo cual se concede la palabra al siguiente orador:

22.- Hernán Javier FIORI, DNI 22237149, Particular interesado Expositor;

23.- José Luis RAMÓN, DNI 16902710, en representación de Protectora Fuerza Política;

24.- Convocada para su exposición la Sra. Mirna Belén AREVALO, DNI 40139547 no se encuentra presente en la sala virtual, por lo cual se concede la palabra al siguiente Expositor;

25.- Pablo MONTES DE OCA, DNI 18369010, en representación de ROWING S.A. no se ha encontrado presente en la sala virtual al tiempo de su exposición dándose la palabra al siguiente expositor;

27.- Rodolfo SANTANGELO, DNI 12548392, Particular interesado Expositor;

28.- Convocada para su exposición no se encontró presente en la sala Guillerma TENORIO OCHOA, DNI 94696533, Particular interesado Expositor;

Siendo las 12:55 horas del día 23 de enero de 2023, habiéndose dado tratamiento al Orden del Día y no encontrándose presente persona alguna que quiera manifestar su opinión respecto al tema objeto de la Audiencia Pública, la Presidencia de la misma dispone darla por concluida.

Por Secretaría, se pone a disposición el Acta labrada hasta la presente instancia la que es suscripta de conformidad por la Presidencia y por la Secretaria de la Audiencia.

